

CAPÍTULO 2

ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA CONTEMPORÁNEA EN COLOMBIA: FACTORES GENERADORES DE VIOLENCIA EN COLOMBIA¹⁰

Armando Borrero Mansilla¹¹
Escuela Superior de Guerra

RESUMEN

El presente capítulo hace un repaso de todas las épocas y formas de violencia que se han presentado a lo largo de la historia de Colombia, desde la violencia bipartidista y la generada por el conflicto armado interno por las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico, hasta la violencia urbana moderna, analizando el impacto que estas han tenido sobre la población civil, las élites políticas, las fuerzas militares y la sociedad colombiana en general. Se argumenta que, si bien las fuerzas armadas colombianas han logrado importantes avances en su estructura

10 Capitulo de libro resultado de investigación vinculado al proyecto de investigación “Desafíos para la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia - Fase III”, que hace parte de la línea de investigación: “Políticas y modelos de seguridad y defensa” perteneciente al Grupo de Investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0104976 vinculado al Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales -CSEDN-, adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia.

11 Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Asesor e Investigador del Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales -CSEDN- de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Contacto: armando.borrero@esdgue.edu.co

y su rendimiento para enfrentar a las guerrillas en la compleja configuración geográfica colombiana, el Estado no ha conseguido asentarse de manera homogénea en todo el territorio nacional, para combatir eficientemente las diversas expresiones de violencia en el país.

Palabras clave: Conflicto Armado Interno, Fuerzas Militares, Seguridad Democrática, Narcotráfico, Terrorismo.

ABSTRACT

This chapter reviews all the eras and forms of violence that have taken place throughout the history of Colombia, from the bipartisan violence and the violence generated by the internal armed conflict by the guerrillas, the paramilitaries and the drug traffickers, until modern urban violence, analyzing the impact that these have had on the civilian population, the political elites, the military forces and Colombian society in general. It is argued that, although the Colombian armed forces have made important advances in their structure and performance to confront the guerrillas in the complex Colombian geographic configuration, the State has not managed to settle homogeneously across the national territory, to fight efficiently the various expressions of violence in the country.

Keywords: Internal Armed Conflict, Military Forces, Democratic Security, Drug Trafficking, Terrorism.

1. Introducción. 2. Las violencias colombianas. 3. La gran herida nacional: La Violencia. 3.1. La violencia en masa. 4. La guerra de guerrillas. 5. El Estado, la fuerza y la violencia. 6. La Violencia Urbana. 7. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de la violencia y de sus causas tropieza siempre con la inasibilidad relativa de los fenómenos sociales multicausales. Cuando en la historia alguna forma de violencia se asocia a una causa claramente establecida –un evento disruptivo de alcance social o político alto, por ejemplo- es común encontrarse con el hecho de ser el evento una manifestación de un proceso mayor y más prolongado que el sólo estallido, y el incidente de efecto instantáneo, que aparenta ser la causa, es solamente el disparador de fuerzas largamente incubadas. La comparación de los fenómenos violentos entre sociedades, etapas históricas, culturas o morfologías sociales diferentes, siempre conduce a preguntas acerca de por qué, en condiciones semejantes aparentes, en una sociedad o grupo se produce violencia y en otras no.

Un ejemplo de esta dificultad puede ser el papel atribuido a un fenómeno social muy socorrido como factor de violencia. Se trata de la pobreza. Es indudable que la pobreza es un factor favorecedor de ambientes de violencia, pero los estudios comparados muestran que no es una variable determinante, de modo necesario. Tampoco la opresión o la exclusión política muestran comportamientos comparables como causales. Los tiempos históricos muestran algo similar. En situaciones aparentemente similares, unas veces aparece la violencia y otras no.

La complejidad del problema estriba no sólo en encontrar las variables causales, sino que se debe establecer el balance entre las mismas, las condiciones históricas para su encuentro, la proporción en la cual se combinan y los antecedentes de la situación de encuentro. Sociedades con culturas bien arraigadas y grados de integración social elevados, pueden resistir mejor los estímulos de la violencia, que otras menos integradas y con historias de inestabilidad.

Del tamaño anotado son las dificultades para afrontar el asunto, sin dejar de mencionar que las formas de violencia varían mucho. En el concepto conviven las violencias masivas, en extremo, con violencias políticas que pueden ser masivas o selectivas y con los tipos de violencia menos evidentes como las agrupadas en el concepto de "violencia estructural" o "violencia estructural difusa". A veces se presentan explosiones de violencia súbita como el genocidio pavoroso de la etnia tutsi en Ruanda, a manos de los pertenecientes a la etnia hutu; otras veces son guerras entre Estados que pueden develar más fácilmente las causas esgrimidas para ir a la disputa armada, sin que estas expliquen por qué en otras situaciones u otras sociedades y otros momentos históricos, no se producen enfrentamientos violentos.

La investigación ha avanzado para establecer taxonomías y construir "tipos ideales" de situaciones. Igualmente se avanza en identificar factores comunes en el desencadenamiento de fenómenos violentos. Pero reducir el problema a la determinación de "una causa" no parece tener sentido. Un estudio de las violencias clasificables como "masivas" llega a una conclusión similar para el establecimiento de la etiología de una forma específica de violencia. Textualmente aduce:

Cada masacre tiene múltiples causas. Algunos estudiosos del genocidio han concluido que la interacción de toda una gama de factores y de procesos da por resultado una intensificación de la destrucción humana –pero no se ve claro cómo ocurre esto específicamente- si toda una variedad de personas, en números considerables, participa en la organización de la violencia en masa, lo hace por toda una gama de intereses, antecedentes o actitudes. Y sus distintas razones parecen dar más apremio a su empleo de la fuerza. Reducirlo todo a una causa que los unió para participar (causa ideológica, revanchista, "genocidio")

económico, etc.) tiene poco sentido si el terrible poder de la violencia brota precisamente de una mezcla de diversos factores. Más prometedor parece preguntarse acerca de la coincidencia de las actitudes y los intereses que los unieron. ¿En qué estuvieron de acuerdo, por cuánto tiempo y con qué diferentes propósitos? Tales preguntas nos permitirán explicar por qué brotó o se intensificó la violencia de masas en ciertos puntos y se redujo o se terminó en otros (Gerlach, 2015, p. 17-18).

Lo predicado de la violencia en masa se puede trasladar a toda otra forma de violencia. Aún una violencia individualizada es difícil de reducir a una determinación precisa y, además, hay una variedad de imponderables que modifican tiempo, lugar y modalidad de violencia. Sin embargo, ninguna violencia ocurre al margen de la sociedad, de la cultura y de la historia. Se puede intentar hacer su caracterización, indagar causas y establecer circunstancias.

En este capítulo se buscará reunir lo estudiado en Colombia para intentar explicar, por lo menos parcialmente, la recurrencia de la violencia en un período que se ocurre largo, entre los siglos XX y XXI. Se puede ir más allá de la hipótesis en muchos planeamientos y sentar bases para construir problemas de investigación. Tal es la tarea que se pretende emprender en todos los trabajos que reúne el libro.

2. LAS VIOLENCIAS COLOMBIANAS

Hay una referencia obligada para la clasificación de “las violencias” colombianas (en plural porque son varias modalidades) y es el informe “Colombia: Violencia y Democracia”. En un periodo de intensificación de la violencia, tanto la producida por el conflicto armado interno, como por las organizaciones de narcotraficantes, durante el comienzo del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990)

el entonces Ministro de Gobierno, Fernando Cepeda Ulloa tomó la iniciativa de convocar una Comisión de Estudios sobre la violencia. La Comisión, compuesta por un grupo de académicos y un General (r) del Ejército, produjo el informe referido y abrió un debate que no cesa del todo en la academia y en la política del país.

La Comisión comenzó por replantear la naturaleza del fenómeno y diferenció 4 campos, como contexto de partida para una clasificación y conceptualización. Textualmente:

Para cumplir su cometido, la Comisión partió de un replanteamiento de la naturaleza del fenómeno, que le permitió diferenciar, al lado de la violencia política, otras tres modalidades básicas: la violencia socioeconómica, la violencia sociocultural y la violencia sobre los territorios. Formas todas ellas que se ven reforzadas por una cultura de la violencia que se reproduce a través de la familia, la escuela y los medios de comunicación, como agentes centrales de los procesos de socialización” (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987, p.11).

A partir de esta diferenciación inicial, la Comisión de la época hizo una clasificación de las formas múltiples de violencia que se enmarcan en las cuatro modalidades mencionadas en la cita anterior. Estas formas tipificadas hace 31 años mantienen su vigencia, aunque haya cambios en la intensidad comparada. Estas formas son:

1. Violencia del crimen organizado contra políticos y periodistas. Esta violencia sigue presente, aunque ha adquirido matices preocupantes porque hoy, más que contra políticos profesionales, se da contra líderes sociales. Estos líderes pueden ser considerados políticos por el papel que juegan en procesos

socioeconómicos de alcance político importante: recuperación de tierras y otras reivindicaciones de las víctimas de violencias anteriores y en curso, que se relacionan con la distribución del poder en la sociedad y con las funciones del Estado.

2. Violencia del crimen organizado contra personas privadas que reviste formas como el atraco, la extorsión y la eliminación física, además de las prácticas del “boleteo” y la amenaza (hoy centradas, sobre todo, en la extorsión). Comprende igualmente actos de los escuadrones de la muerte y de las agrupaciones de sicarios, modalidades que se dan en el primer punto (contra político y periodistas) pero que pueden distinguirse en este segundo punto cuando son por causas que no trascienden a lo político (aunque, como toda delincuencia, y especialmente las formas de justicia privada, tienen consecuencias políticas).

3. Violencia de las guerrillas dirigidas contra el Estado. Conserva vigencia por la presencia del ELN y de algunos grupos ambiguos provenientes del EPL. Las disidencias de las FARC parecen más bandas criminales típicas, vinculadas al narcotráfico.

4. Violencia de los grupos alzados en armas contra particulares, en busca de financiación, o para tomar represalias contra presuntos colaboradores de las fuerzas del Estado o para liquidar enemigos individualizados.

5. Violencia de organismos del Estado en ejercicio de la guarda del orden público, cuando sobrepasan los marcos de la legalidad institucional. En el presente ha disminuido, tanto por el desarrollo de controles institucionales, como por cambios de cultura institucional en los organismos de los órdenes policial y militar.

6. Violencia del Estado contra movimientos sociales de protesta. Esta modalidad ha cambiado cualitativamente por el desarrollo de fuerzas especializadas en el control de las

manifestaciones activas de estos movimientos (grupos policiales antimotines) que evitan el uso de fuerza militar y por controles institucionales que preservan el derecho de protesta. Por supuesto, las movilizaciones que caen en las vías de hecho son reprimidas, pero ya no se presentan situaciones de otras épocas como por ejemplo los casos de Cementos El Cairo, en Antioquia, o de Puente Rojo, en el Valle del Cauca, ambos acaecidos en los años 60 del siglo pasado. En los 2 casos hubo muertos porque se abrió fuego para contener a trabajadores en movimientos de protesta. Hoy, hay una marcada preferencia por el diálogo civil.

7. Violencia del Estado contra minorías étnicas. Este punto, estrictamente, no está presente hoy. Hay violencia contra minorías, pero de grupos armados no estatales, y cuando algunos miembros de las fuerzas del Estado se sobrepasan y maltratan a comunidades étnicas minoritarias, no lo hacen tanto por el carácter de diferencia étnica sino por señalamientos de apoyo a guerrillas o a bandas criminales, o por causa de la resistencia, en algunos casos, a las políticas antinarcóticos. La Constitución Política de 1991, en este aspecto, sí ha resultado ser un marco institucional adecuado para desarrollar una cultura nueva de protección a indígenas, comunidades negras y raizales. Se ha avanzado en la eliminación de prejuicios y calificaciones de las culturas diferentes como "inferiores" o "no civilizadas".

8. Violencia de particulares no organizados, en actividades tales como robo, hurto calificado, homicidio y lesiones personales, ajuste de cuentas y justicia privada. Es el vasto mundo de la delincuencia común no organizada, que gana terreno en las grandes áreas urbanas. En áreas rurales también se presentan modalidades de ajuste de cuentas, justicia privada, homicidio y lesiones personales, mayormente en regiones de formación social reciente como las comunidades de colonos, y menos en el campo ancestral colombiano, con Estado mejor asentado y comunidades más estables.

9. Violencia de particulares organizados, del tipo “escuadrones de la muerte” o grupos de “limpieza social” que buscan eliminar subversores políticos o morales, a partir de sus propias concepciones de “corrección política o moral. Fue una violencia notoria en algunas de las ciudades grandes, durante los años 80. Las víctimas fueron de preferencia, prostitutas, travestis, indigentes, expendedores de drogas, ex-convictos y en general, gentes consideradas “lacras sociales”.

10. Violencia de particulares en su vida privada, tanto la derivada de consumo de alcohol y otras drogas, como la violencia intrafamiliar, expresión de dominio sobre los miembros más débiles de la familiar y de grupos allegados.

Los 10 puntos enunciados muestran una característica común: de manera trasversal, en todas las modalidades anteriores, aparece la violencia criminal ejercida por delegación, como la presenta el informe citado. En Colombia se ha dado, sobre todo desde los años setenta en adelante, el sicariato convertido en profesión. El asesino a sueldo fue potenciado por el narcotráfico y hoy forma parte de los usos de las bandas criminales y las “oficinas de cobro”.

También debe anotarse que la violencia política ha sido principalmente rural. La violencia liberal-conservadora, para llamarla de alguna manera, fue rural y las ciudades se convirtieron en refugio de campesinos desplazados que buscaron seguridad en éstas. El “exilio interno” se expresó en migración del campo a la ciudad y junto con los factores económicos, potenció tanto la celeridad, como el volumen de los movimientos de población en Colombia (Torres, 1985; Fals, 1985).¹²

12 Sobre el particular puede consultarse: Torres, C. (1985). “La violencia y los cambios socio-culturales en las áreas rurales colombianas”. En: Fondo EC CEREC y Centro Gaitán. *Once Ensayos sobre la Violencia*; y Fals, O. (1985). “Lo sacro y lo violento, aspectos problemáticos del desarrollo en Colombia”. En: Fondo EC CEREC y Centro Gaitán. *Once Ensayos sobre la Violencia*. Bogotá.

Las ciudades han visto crecer sus indicadores de violencia, pero ha sido más una violencia social que una violencia política. Esta última se ha presentado como terrorismo, pero su intensidad no es comparable con la del campo.

3. LA GRAN HERIDA NACIONAL: LA VIOLENCIA

3.1. LA VIOLENCIA EN MASA.

Los distintos tipos de violencia que ha sufrido Colombia a lo largo de los últimos 70 años, si se toma como punto de partida el año de 1948 cuando la explosión iracunda del 9 de abril se convirtió en referencia obligada (aunque ya había manifestaciones inquietantes desde antes) para la caracterización de un periodo histórico, son un antecedente claramente delimitado que incide de manera directa en los fenómenos violentos subsiguientes de carácter político, e indirecta en el conjunto de las que surgen de un clima de desintegración social y de erosión del Estado.

El periodo de la violencia caracterizada comúnmente como "partidista" y predominante en un lapso que abarca desde la segunda mitad de los años 40 hasta la mitad de la década siguiente, con un periodo crítico de violencia elevadísima entre 1949 y 1953, es el escenario temporal de un fenómeno que, claramente, no puede ser considerado como una guerra. El concepto ya enunciado de "violencia en masa" responde mejor a las características de ese fenómeno multiforme, inasible en muchos aspectos, que fue la llamada "Violencia" del medio siglo colombiano.

Los orígenes del conflicto liberal-conservador hunden sus raíces en la historia colombiana desde mediados del siglo XIX y pueden explicar el enfrentamiento entre los dos partidos, más allá de la competencia normal entre partidos por el control del aparato estatal, en alguna medida. Pero los antecedentes de esa

competencia, aun la que se dio por medio de acciones violentas, no bastan para dar cuenta de una violencia ciega, irracional y masiva, como la que se dio en el periodo mencionado.

La elección del concepto de violencia en masa, inspirado en la obra de Christian Gerlach (2015), no implica que la violencia colombiana de los años 40 y 50 del siglo XX, quepa de manera exacta y precisa en el concepto. Se trata, más bien, de una aproximación que parte del supuesto de considerar que dentro de las diferentes modalidades de violencia que coinciden en la Colombia de esa época, el concepto de violencia en masa se acerca más a la forma dominante del fenómeno. La aproximación se hace notoria porque la violencia colombiana contiene elementos variados y no toda fue en masa. Hubo violencia en masa para expulsar grupos de las poblaciones (no necesariamente la población entera) y en ese caso cabe el concepto de politicidio porque fue la adscripción al partido político rival del detentador del poder, la identidad perseguida. No fueron matanzas por identidades étnicas, ni religiosas, sino políticas y sub-culturales. Donde hubo resistencia armada, se dieron matanzas masivas para quitarle a los resistentes, mediante el terror, el apoyo de la población.

Se trató de una violencia en masa para castigar a quienes se hicieran solidarios con la oposición, fuera civil y desarmada, o armada en forma de guerrillas de resistentes. Sin embargo, las modalidades de homicidio selectivo, de violencias no necesariamente homicidas (los apaleamientos, p.e.) el despojo económico por intimidación o la expulsión de toda forma organizada de vida social e institucional (del trabajo, de la iglesia, de las instituciones educativas, y en fin, de las asociaciones de todo tipo) introducen una dificultad clasificatoria.

La primera dificultad estriba en las diferencias de modalidades, tiempos de duración y alcance por regiones, La segunda dificultad reside en la ausencia de estadísticas

confiables de los homicidios, el despojos de tierras y bienes, y los desplazamientos de población. La tercera dificultad alude a una cuestión multicausal, más difícil de entender, y es la sevicia y la crueldad extremas, que se vieron en los métodos y en los rituales de la muerte. Un obra que provocó un debate político intenso cuando se publicó en 1962, "La Violencia en Colombia" (Guzmán, Fals y Umaña, 1962), contiene un capítulo estremecedor, el capítulo IX "Tanatomanía en Colombia", que describe y presenta evidencia gráfica de las torturas previas al asesinato, de las formas, crueles en extremo, de dar muerte, y de la sevicia con los cadáveres. El mensaje del terror para los perseguidos fue escalofriante y cumplió con creces el propósito de deshacerse de opositores ciertos o supuestos.

En las violencias en masa se da, generalmente, una participación compleja de grupos e instituciones, una variedad de métodos y de calamidades infligidas contra no combatientes. La definición de Gerlach (2015) precisa el concepto de sociedades extremadamente violentas:

Por sociedades extremadamente violentas me refiero a las formaciones en que varios grupos de población son víctimas de una violencia física en masa, en la cual, actuando junto con órganos del Estado, diversos grupos sociales participan por múltiples razones. (p. 15)

La definición caza muy bien con lo que fue la violencia colombiana de los años 40 y 50.

Para empezar, si bien la identidad partidista fue el discriminador más importante para establecer una enemistad, otros grupos victimizados lo fueron por identidades diferentes (aunque la retórica oficial los asimilara a una identidad común presentada como opuesta a valores "fundamentales de la nacionalidad") Liberales, protestantes, masones y comunistas

fueron englobados en esa retórica. También grupos étnicos, principalmente indígenas, fueron asimilados a identidades políticas para esconder el propósito de despojarlos de tierras ancestrales.

En el proceso de formación de un Estado nacional en Colombia, los partidos políticos tradicionales, el Liberal y el Conservador, adquirieron un protagonismo central. En otros países de América Latina los mitos fundadores de la nacionalidad suelen ser caudillistas y militares. En Colombia la mitología histórica adjudica un papel notable a los partidos. No hay, por ejemplo, imágenes de ejércitos integradores del territorio como en Chile o Argentina. Tampoco caudillos como Rosas, o como Santa Anna y Porfirio Díaz. Siempre los partidos en las guerras civiles y en los proyectos constitucionales. Los partidos llegaron a ser algo así como subculturas. La adscripción partidaria fue determinada por la filiación familiar. La calidad de liberal o de conservador, con excepciones, desde luego, se heredaba como parte constituyente de un legado.

También la violencia por motivos partidistas se propagó en diversas direcciones. Las “funcionalidades perversas” actuaron para darle una dinámica mayor a las persecuciones. Matar y desplazar opositores políticos, por ejemplo, abrió la oportunidad de copar bienes materiales y ventajas económicas. Un motivo común fue el acaparamiento de posiciones en el aparato estatal. Puestos de trabajo, concesiones (una muy importante porque estaba en todos los municipios fue la concesión para la distribución de licores, entonces monopolio del Estado) y contratos, se convirtieron en botín. Los bienes abandonados o vendidos de urgencia por quienes no podían rechazar la primera oferta fueron otro filón y estimularon violencias dirigidas al objetivo de acumular tierras en beneficio de quienes tenían recursos (estatales o privados) para el ejercicio de la violencia.

También, como en otros ejemplos de violencia en masa, la participación fue tanto organizada (estatal y privada) como individual o de grupos con organización precaria para un propósito puntual. La participación más notoria del Estado se dio por medio de la policía reorganizada en 1948, la que popularmente se conoció como la policía “chulavita”. En regiones como el Tolima-Huila, los Llanos Orientales, el norte de Antioquia y el Magdalena medio, actuaron guerrillas de origen liberal la mayor parte, y en el Tolima-Huila-Cauca, algunas organizadas por el partido comunista como forma de resistencia armada a las fuerzas gubernamentales, especialmente la policía, y grupos organizados de origen conservador con apoyo estatal, como fue el caso de las “guerrillas de paz”.

Las violencias de la época tomaron formas distintas por regiones. Allí donde la agricultura estaba en proceso de transformación, la motivación económica fue evidente: las zonas cafeteras y el valle del Magdalena alto, fueron zonas, o bien de cambios de propietarios, como en las cafeteras, o de desplazamientos masivos de comunidades campesinas y de acumulación de tierras, como en el Tolima o en el Valle del Cauca. En los Santanderes y Boyacá, departamentos de menor dinámica económica en ese momento, la lucha por el control del aparato burocrático del Estado, el mayor empleador, provocó ataques de unos pobladores contra otros para procurar la huida de los rivales (lo que su momento se llamó “el exilio interior”) casi siempre a las ciudades, donde el impacto de la violencia fue atenuado. Esto fue notorio antes del rompimiento de la coalición liberal-conservadora formada para paliar los efectos del 9 de abril, la fecha mítica de los colombianos (Braun, 2007)¹³ en el siglo XX, porque la coalición facilitó la permanencia de liberales en cargos oficiales.

13 Se refiere al 9 de abril de 1948, fecha del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, cuando se produjo como reacción un alzamiento popular violento, masivo pero desorganizado, que ahondó la enemistad entre los partidos.

El carácter masivo de la violencia se expresó en masacres y en asesinatos continuados, es decir, presentes en la cotidianidad. La fase más cruel de la violencia se dio entre 1949 y 1953. Rota la llamada Unidad Nacional y cerrado el Congreso, los sectores más extremos del partido Conservador le exigieron al gobierno una cuota de gobernadores de departamento “duros” para asegurar la permanencia del partido en el poder. En el horizonte inmediato estaban la candidatura de Laureano Gómez y el proyecto de cambio constitucional que este dirigente impulsaba.

Vale la pena detenerse en la caracterización del conjunto del fenómeno. Hasta ahora se ha utilizado un concepto muy general, el de “violencia en masa” para describirlo, pero no para explicarlo. De modo más circunscrito al fenómeno histórico, se han intentado diversas figuras, retóricas las más, para nombrarlo: “guerra civil no declarada” fue el más utilizado en el lenguaje oficial y hace énfasis en la idea de una guerra entre partidos; “revolución frustrada” o “aplazada”, son términos que destacan la idea de luchas agrarias. La cita que sigue, de un escrito de Jesús Antonio Bejarano (1985, p. 48), da cuenta de la perplejidad subyacente a los intentos de conceptualización.

Lo que sorprende a los observadores extranjeros y a los practicantes de historia comparada, es la especificidad de un fenómeno que constituyó, probablemente, con excepción de algunos periodos de la Revolución Mexicana, la mayor movilización armada de campesinos (guerrilleros, bandoleros y grupos de autodefensa) en la historia reciente del hemisferio del hemisferio occidental (citando a Hobsbawm, 1974, p. 264) lo que la aproximaba a una revolución social de masas que acabó degenerando en una guerra civil anárquica y desorientada (citando a Hobsbawm, 1970) que a diferencia de otros movimientos campesinos, de un modo muy intenso, combinó simultáneamente el

agrarismo reformista, el agrarismo revolucionario y el bandolerismo político (Sánchez, 1976) Y que al mismo tiempo llevó sus manifestaciones a un grado extremo de ferocidad y apasionamiento, del que no hay ejemplo en otra parte (citando a Hobsbawm, 1970).

El texto citado sugiere muchos interrogantes. Por una parte, se acude a las investigaciones de Hobsbawm, quien emplea el concepto de guerra, en este caso calificada como "anárquica y desorientada". Por otra se entrevé una movilización campesina que se aproxima a revolución social de masas y se le atribuyen elementos de agrarismo, bien reformista, bien revolucionario. Esta mirada sobre el problema plantea una discusión de fondo y es una cuestión no terminada en las investigaciones sobre el período.

¿Guerra o violencia en masa? Lo confuso de esas violencias colombianas da pie para defender una y otra tesis. También para pensar que las dos modalidades coexistieron. Hubo guerra de guerrillas, en áreas bien delimitadas del país. Los tamaños de las fuerzas enfrentadas pudieron tener importancia local, pero en el panorama total no fue un tamaño de fuerzas enfrentadas de envergadura. En 1948, el año del 9 de abril, el Ejército Nacional contaba con sólo 8.000 hombres. En 1953 había crecido a 20.000. No era gran cosa para un país extenso y de movilidad difícil por la geografía y por la escasez de infraestructura adecuada para las comunicaciones.

El tamaño de las guerrillas nunca ha podido ser establecido de manera clara. Los cálculos oscilan desde 45.000 hombres, una exageración sin sustento (más del doble de los efectivos del Ejército en 1953. Obviamente no creíble) hasta los tres mil que los medios de comunicación de la época de la entrega guerrillera de 1953 calcularon. Hacer un cálculo real es difícil porque muchos combatientes pudieron ser ocasionales o participaron

como auxiliares sin ser claramente diferenciados de los combatientes más permanentes. El cálculo que sigue, solamente para el periodo 1949-1953 (no incluye los grupos de lo que sería llamado luego, el bandolerismo) será, seguramente, poco aceptado por la mayoría de los estudiosos del tema, pero se hace sobre la base de comparar acciones y efectos en otros conflictos, y de comparar las relaciones entre el tamaño de las fuerzas del Estado y las guerrillas que combate. Generalmente el tamaño de las fuerzas estatales debe ser entre 10 y 20 veces mayor que el de las guerrillas para proteger la estabilidad del Estado y pretender la victoria.

Las guerrillas de los Llanos Orientales, sumadas no llegaban a 2.000 hombres y su armamento fue muy precario. Los fusiles Mauser de 7mm. eran su arma más poderosa, pero buena parte de la tropa guerrillera usaba escopetas y algunos fusiles tan viejos como los venerables Grass de 1871, veteranos de las guerras civiles de 60 y 50 años atrás. El cálculo de hombres en armas aquí mencionado parece muy bajo comparado con los tres mil hombres de las informaciones de prensa de la época. Lo cierto es que, en la entrega de los guerrilleros, tras el golpe de Rojas Pinilla, se presentaron en cinco lugares diferentes 1.010 hombres en armas. Un poco más adelante, se entregaron guerrillas que no estuvieron entre las primeras, pero supuestamente parte de los comandos de Guadalupe Salcedo y de Dumar Aljure. También depusieron las armas los contra-guerrilleros comandados por Benito Gutiérrez, de la guerrilla de signo contrario, conservadores de las guerrillas de paz, armadas por el Ministerio de Gobierno entre 1950 y 1953 (Aicedo, 1991).

Es posible que los guerrilleros efectivos y permanentes fueran apenas poco más que los 1.010 de la primera ola de entregas. Otro indicador es el bajo número de armas de los últimos grupos que se presentaron. Es posible que, por el desarrollo de los movimientos guerrilleros, en 1953, el último año de su existencia, se hubiera llegado al máximo de guerrilleros, de

tal manera, que, si hubo tres mil, las dos terceras partes fueron auxiliares o participantes ocasionales. En una mención del Archivo Digital de El Tiempo (Aicedo, 1991), se dio el dato de 10.000 guerrilleros más auxiliares, pero sin precisar número estricto de combatientes. Un dato que permite suponer un tamaño menor que el proclamado en la época, es el número de armas largas entregadas. En las primeras entregas de Fonseca Galán, Guadalupe Salcedo, los Bautista y Dumar Aljure, el porcentaje de armas sobre el número de combatientes es significativo. En las siguientes entregas el número es casi insignificante.

Hay un detalle en la obra de Eduardo Franco Isaza que descalifica cualquier cálculo por encima de cifras entre 1000 y 3.000 como máximo. Se trata del relato de la entrevista de los mandos guerrilleros con el expresidente López Pumarejo en 1952. López exploraba la posibilidad de un acuerdo entre resistentes y gobierno. Los guerrilleros le pidieron apoyo para comprar 5.000 fusiles, con los cuales aspiraban a convertirse en una fuerza irresistible en los Llanos Orientales. La gran limitante del crecimiento era depender de armas capturadas al Ejército y a la Policía nacional, y a intercambios pequeños de armas en la frontera con Venezuela. La respuesta de López, relatada por Franco, muestra solamente la intención de "zafarse" del problema: "yo no conozco un solo militar colombiano capaz de manejar 5.000 fusiles", dijo y cambió de tema (Franco, 1957).

Las guerrillas no tuvieron unidad y en su conformación se advierte un elemento primitivo. Las más grandes tuvieron como base las clientelas de terratenientes locales o de los Andes boyacenses adyacentes a las llanuras. Los comandos guerrilleros se constituyeron alrededor de jefes unidos por lazos de familia, todos propietarios de tierras, principalmente en el piedemonte de Boyacá-los Llanos: los hermanos Bautista, los hermanos Fonseca, los hermanos Chaparro, los Carreño, Rodríguez, etc. Propietario de tierra fue también Franco Isaza. Otros, de origen más popular, oriundos o inmigrantes, pero muy ligados al llano,

fueron Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure y Berardo Giraldo. Su horizonte político fue limitado y cuando gentes de las ciudades (el caso de José Alvear Restrepo, abogado de Medellín es paradigmático) se les unió e intentó darles contenido social a las reivindicaciones, se estrellaron contra el escaso desarrollo de una conciencia revolucionaria, cuando no contra una hostilidad manifiesta. La versión más aceptada de la muerte de Alvear, es la de una muerte intencional causada por los propios guerrilleros en agosto de 1953, cuando se discutía sobre las condiciones de entrega.

Las guerrillas de zonas centrales andinas, del Tolima-Huila-Cauca-Cundinamarca, no fueron mayores en la primera etapa y tampoco tuvieron unidad. Fueron más de resistencia que de objetivos políticos claros. Aunque una discusión sobre el tamaño no es central en este trabajo, se enfatiza el asunto porque publicaciones recientes magnifican las cifras sin mucho sustento. Debe anotarse que no se trata de minimizar la cuestión. Si hubo 5.000 guerrilleros en todo el país, ese número es significativo. Para el tamaño del país de entonces, sería comparable a los casi 20.000 guerrilleros de las FARC en el año 2.000.

Las guerrillas de la época no tuvieron unidad, y aún en el llano, ésta fue precaria y, por eso, podemos tipificar el conjunto como una guerra de guerrillas en germen. Sin embargo, la conformación de guerrillas en la época, tanto en los llanos, como en las cordilleras central y oriental, y el valle del Magdalena, generaron una tradición que tuvo una influencia grande en la etapa subsiguiente de guerrillas revolucionarias, a partir de 1964.

Otros ejemplos de violencias locales apuntan más a la concepción de “violencia en masa”, en la cual grupos diversos pero unidos por el objetivo, atacan a un grupo definido como enemigo por su identidad, sea étnica, política, cultural, religiosa o regional. En el caso colombiano fue la identidad política el factor movilizador, aunque a veces el “politicidio” encubrió

otras motivaciones. El modelo Norte de Santander, para ponerle nombre a una modalidad bien conocida, pero no exclusiva de esta región, fue la movilización de campesinos o pobladores de pequeños pueblos, de filiación conservadora, contra los liberales.

En un pueblo de cabecera municipal predominantemente liberal,¹⁴ a finales de 1949, los jefes conservadores locales hacían traer a los campesinos de las “veredas” circundantes, mayoritariamente conservadores, para abalear las casas de los liberales, en una primera advertencia, o asesinarlos si permanecían en el pueblo después de dos o tres abaleos. En otras regiones, la masacre no tenía advertencias. Se asesinaba la totalidad de los habitantes de una hacienda, se asesinaba en las carreteras a los viajeros procedentes de pueblos o veredas liberales. Las retaliaciones, sobre todo allí donde hubo resistencia guerrillera fueron de la misma naturaleza: liberales que se organizaban y tomaban venganza, también indiscriminada. Hubo masacres en cabeceras municipales, como fue el caso del municipio de El Carmen (Norte de Santander) donde fueron fusiladas por la Policía, alrededor de 40 personas en el Tolima, en el Huila, en el Valle del Cauca, en el Cauca, en Caldas (hoy Caldas, Risaralda y Quindío) en zonas de Antioquia (suroeste, norte urabeño y en el Magdalena medio) en Cundinamarca, sobre todo al oeste (El Sumapaz) y en los Llanos Orientales, la violencia fue peor, especialmente cruel y extendida en tiempo y espacio.

Cuando se reflexiona sobre esa insania, en la que gentes de un mismo poblado pequeño, todos conocidos entre sí, que han convivido por años y han compartido los mismos comercios, la misma iglesia, que han visto a sus hijos casarse con las hijas de sus vecinos, que han jugado al fútbol juntos, en fin miembros todos de una comunidad, se convierten de pronto en enemigos feroces, no

14 El pueblo en cuestión fue Villa Rosario y forma parte de los recuerdos del autor, quien fue llevado en su infancia a la vecina Venezuela (destino de casi la mitad de la población de la cabecera municipal) cuando su familia debió huir apresuradamente. Los relatos de los pueblos de la zona cafetera de Norte de Santander son similares en cuanto a la modalidad de desplazamiento, acompañada de asesinatos selectivos y masacres.

es posible alejar de la mente los testimonios de quienes han dado cuenta de fenómenos similares en otras sociedades y en otras épocas. Uno de los testimonios más ilustrativos es el que relata Michael Ignatieff (1999) en su libro “El honor del Guerrero”:

Yo había permanecido toda la noche a su lado, mientras ellos dormitaban, jugaban a las cartas o limpiaban el armamento, porque quería saber qué es lo que pasa en esas ocasiones para que los vecinos se conviertan en enemigos, cómo es posible que la gente que ha compartido tantas cosas acabe por no tener en común más que la guerra. Presenciar el proceso —Afganistán, Ruanda, Irlanda del Norte— me ha dejado siempre estupefacto. Nunca he aceptado que la guerra nacionalista se explique por un repentino estallido de odios tribales y antiguas enemistades. Los teóricos como Samuel Huntington me llevarían a pensar que en el jardín trasero de Mirkovci había un foso: a un lado, se encontraban los croatas representando en su búnker la civilización del Occidente católico romano; al otro, muy cerca, los serbios, en representación del Oriente bizantino, ortodoxo y cirílico. No cabe duda de que las ideologías artificialmente infladas de los dos bandos veían así el conflicto, pero yo no apreciaba que se hubieran abierto en Mirkovci barreras de civilización o geológicas. Tales metáforas dan por sabidas cosas que necesitan explicación: ¿qué tiene que ocurrir para que unos vecinos ignorantes por completo de pertenecer a civilizaciones opuestas comiencen a pensar —y a odiar— en esos términos? ¿Cómo llegan a detestar y demonizar a los que una vez llamaron amigos? ¿Cómo, en definitiva, se siembra, un grano tras otro, la semilla de la paranoia mutua en el terreno de una vida común? (p. 40)

La propuesta de Ignatieff es freudiana: "el narcisismo de la pequeña diferencia" (1999). Cuando han decaído las razones mayores de la diferencia entre las personas, se apela al énfasis en las diferencias pequeñas. La mirada narcisista sobre lo propio, exagera las diferencias. Crea identidades idealizadas, las cualidades de los propios se exaltan y generalizan, tanto como los defectos adjudicados a los convertidos en extraños.

La racionalidad no cabe en el proceso de diferenciación por esta vía. Ignatieff (1999) explora las contradicciones de los milicianos serbios: ellos pueden reconocer que lo religioso no tenía importancia en la vida aldeana. Pocos asistían a las respectivas iglesias, ortodoxa y católica, porque buena parte pertenecía a la Liga de los Comunistas. Los matrimonios mixtos eran corrientes. Serbios y croatas se identificaban como yugoslavos. Pero una vez exacerbada la prédica nacionalista, los croatas volvieron a ser, para los serbios, los "ustachas" que los atacaron, vejaron y masacraron en la segunda guerra mundial. De manera simétrica, los serbios fueron redescubiertos por los croatas, como los "chetniks" que hicieron lo propio contra los croatas, en aquella guerra que seguramente no vivieron muchos de los habitantes de las trincheras donde Ignatieff tropezó con esta historia. La memoria estimulada desde las cúpulas políticas, revivió el "chivo expiatorio" sacrificial.

En el período de la "Violencia" colombiana, la liberal-conservadora, se pudo observar un fenómeno similar. En una mayoría abrumadora de las poblaciones y campos, no hubo fractura cultural por causas religiosas o de raza, ni odios heredados por identidades distintas de la filiación política. Las diferencias ideológicas eran patentes sólo en un segmento relativamente pequeño de la población: en la cúpula social dirigente y en capas medias educadas. La mayor parte de la población compartía ideas políticas semejantes. Se era liberal o conservador por herencia familiar, principalmente. Había pueblos conservadores y pueblos conservadores, pero también mezclados. Algo quedaba

de la huella de las guerras civiles, pero para la mayor parte de la población, muy joven en esos comienzos de la explosión demográfica, el recuerdo de la guerra de los “mil días” era parte de los cuentos de los abuelos.

Para el común de las gentes, el punto de discordia más visible era el reparto de los puestos de trabajo del Estado. Para las élites dirigentes, los repartos podían ser más complejos: el Estado pobretón, hasta la reforma tributaria del gobierno López Pumarejo, ya no lo era tanto. A las élites las dividía el problema agrario, la política laboral, la modernización de la sociedad y las relaciones entre el Estado y la religión católica, entre otros temas políticos. La Iglesia católica fue homogéneamente conservadora, con sectores muy militantes e ideología cercana al falangismo español. Fue una fuerza de oposición a la República Liberal y no fue un factor menor en las violencias de los años 30 (la “guerra chiquita”) ni en los de los años 40 y 50. En los años 60 y hasta ahora, se dio un cambio profundo en la Iglesia y ha sido una institución mediadora y comprometida y con liderazgo, en los procesos de paz. Los intentos tímidos de reforma en la llamada República Liberal (1930-1946) se estrellaron contra la oposición conservadora y buena parte del propio partido liberal en el gobierno.

Durante un buen tiempo de los gobiernos liberales hubo pugnacidad. Los debates en el Congreso y en los medios de comunicación fueron agrios. En los órganos periodísticos de los partidos la violencia fue, sobre todo, de palabra. No faltaron enfrentamientos físicos producidos por el sectarismo político, pero tras los episodios violentos de los años 30-32 provocados por alzamientos conservadores locales, el país fue relativamente pacífico. Sin embargo, se gestaba una tormenta: la oposición de élites resistentes al cambio, manifiesta desde el gobierno reformista de López Pumarejo (1934-1938) y agudizada a propósito de su reelección en 1942, fue in crescendo. La extrema derecha conservadora fue implacable en su oposición. Ya en 1940

se oyeron amenazas de violencia. En un debate parlamentario, el más caracterizado dirigente conservador de la época proclamó irresponsablemente “[...] llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado personal [...] y haremos invivible la república”¹⁵

En 1944, un sector del Ejército Nacional intentó un golpe de Estado, que de manera obvia fue promovido por sectores del partido conservador y del clero católico. La mayor parte del Ejército permaneció leal al gobierno y el golpe fracasó. Sin embargo, el malestar era evidente, la polarización política profunda y dentro del propio partido de gobierno se agrietaba la unidad, de por sí, ya precaria. La crisis hacía presentir la división liberal que llevaría, dos años más tarde, el partido conservador al gobierno. Más adelante, tras el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948, cuando a finales de 1949 se rompió la coalición de circunstancias que se intentó para detener el peligro de una guerra civil, la pugna entre las élites políticas llegó al clímax. El gobierno cerró el Congreso de mayorías liberales, arreció la violencia y se llegó a una elección sin oposición, con el candidato conservador Laureano Gómez como único postulante.

El periodo presidencial que se inicia en 1950 desnuda totalmente las oposiciones y las contradicciones de las élites políticas. El proyecto de cambio constitucional de Gómez iba por el camino de un Estado corporativo, al estilo del fascismo italiano o del falangismo español. La resistencia armada, más organizada, aunque no hasta constituir un proyecto nacional (no logró comprometer de manera decidida y unificada, ni siquiera al partido liberal) ahondó la crisis. Lo único claro era la rivalidad entre las élites, que se proyectaba sobre las masas para producir una fractura social de proporciones muy grandes.

15 Palabras de Laureano Gómez en septiembre de 1940.

El análisis de las violencias del medio siglo XX colombiano, debe tener en cuenta como factor inductor de los enfrentamientos, el traslado de esa rivalidad de las élites a las masas. El choque feral, que hizo de comunidades convivientes, comunidades rotas por el odio inducido, tiene mucho de prédicas manipuladoras. La descalificación permanente de la legitimidad política del contrincante, plagada de mentiras y leyendas acomodaticias (un ejemplo: la cantidad de 1.800.000 cédulas falsas atribuida por Laureano Gómez al régimen liberal) y la utilización de la religiosidad popular (un ejemplo de esto, con propósito supuestamente pacificador, fue la “tournée de la virgen de Fátima” organizada con apoyo del régimen franquista).

Debe quedar claro que las reflexiones anteriores se refieren a elementos movilizados para la violencia, no a sus causas profundas. Una es, para seguir a Clausewitz (2014), la intención hostil, es decir, lo que nace de las causas remotas, y otra, el sentimiento hostil, el campo de las emociones que permite movilizar a los grupos humanos contra los rivales escogidos por la primera. Las disputas de las élites traducían los intereses en pugna, pero el desencadenamiento de la violencia física se da cuando los factores emocionales, e irracionales, lanzan a los pueblos por la cuesta abajo de la guerra o de las violencias en masa. Colombia sufrió en la primera violencia, una y otra vez, operaciones de guerra de guerrillas (militares contra insurgentes) y violencias contra poblaciones. Participaron organismos estatales, particularmente la policía del régimen, organizada tras el 9 de abril, cuando se disolvió la Policía Nacional por su actuación en los levantamientos populares de la ocasión, o las “guerrillas de paz” también organizadas por el gobierno, o sencillamente, pobladores contra sus vecinos (Molano, 1983).¹⁶

16 Las crónicas de este texto retratan muy bien el ambiente de la época.

La violencia tipificada como "en masa" lo fue no solamente por el número de homicidios, o por número y crueldad de las masacres. También lo fue por los sufrimientos conexos como el despojo y el desplazamiento de comunidades enteras ante el terror desatado. En aquellos tiempos los desplazados solo tenían lo que se ha dado en llamar "el manejo social del riesgo". No hubo institucionalidad estatal de protección ni auxilio internacional, que por lo demás no tenía los grados de desarrollo de hoy.

Detenerse en reflexiones sobre la primera violencia es útil para entender las olas sucesivas, el bandolerismo, la guerrilla y el paramilitarismo, de los conflictos armados en Colombia. Sobre el papel de esta primera violencia no hay acuerdo, pero, definitivamente, no es caer en historicismo acordarle una buena responsabilidad en la génesis de las violencias posteriores: basta estudiar las historias de vida de muchos de los protagonistas para encontrar hilos conductores. En los casos de las FARC y del EPL, son patentes.

Las FARC surgen de las autodefensas campesinas del partido comunista en el sur del Tolima (Pedro Antonio Marín alias "Manuel Marulanda Vélez", fue guerrillero allí desde 1949, en una guerrilla liberal, primero, y luego en las autodefensas organizadas por los comunistas) y en esas autodefensas estuvieron, también, fundadores del EPL como comisarios políticos del P.C.

Junto a Jacobo Arenas (Luis Morantes) cabeza ideológica de las FARC hasta su muerte, estuvo en el Davis Pedro Vásquez Rendón, quien luego de su expulsión del P.C. en 1963, aparece como uno de los fundadores del Partido Comunista M.L. (marxista-leninista) y luego del EPL, para sólo mencionar tres, entre los más destacados protagonistas de uno y otro período.

Otro factor que liga las dos etapas, se relaciona con las áreas escogidas para implantar guerrillas. Las FARC nacen en sus asentamientos históricos, pero el ELN y el EPL eligen para

sus primeros desarrollos áreas geográficas que fueron asiento de guerrillas en la primera etapa y tenían núcleos campesinos con memoria y tradición de lucha armada. Así la región del valle del río San Jorge en el noroeste (el EPL) y el Carare santandereano en el Magdalena Medio (el ELN).

Además de los hilos mencionados, hay otras conexiones entre las etapas de violencias sucesivas. La violencia dejó huellas en sus protagonistas. La desprotección de miles de niños y jóvenes, los traumas por las vivencias de los mismos, cuando sus padres y hermanos fueron muertos, o despojados y lanzados a la miseria, las escenas de sadismo presenciadas y la presencia del terror en la cotidianidad, la pérdida de los núcleos familiares y de los lazos sociales en general, generaron un caldo de cultivo para más violencias. En muchos de los llamados bandoleros de la etapa subsiguiente, y en no pocos de los guerrilleros iniciales en los años 60, se advierte el signo: salieron de esos ambientes de terror y de descomposición social.¹⁷

4. LA GUERRA DE GUERRILLAS

Tras unos años de paz relativa, en la juventud del Frente Nacional, aparece la guerra de guerrillas como forma predominante de lucha. Los factores fueron variados, el problema agrario irresoluto en primer plano, pero hay uno que domina en el plano emocional los aconteceres de la época. Se trata, obviamente, de la revolución cubana. De manera muy directa influyó en la fundación del ELN y en otros intentos menores de lucha guerrillera. De manera indirecta en el surgimiento de las FARC. La razón de la afirmación anterior, es que, si bien las FARC vienen de una tradición de guerrillas campesinas preexistentes

17 Sobre bandoleros típicos del periodo inicial del Frente Nacional, véase: Sánchez, G. y Meertens, D. (1983). *Bandoleros, gamonales y campesinos, el caso de la violencia en Colombia*. Bogotá: El Ancora Editores.

a la revolución cubana, ésta última generó un ambiente único en toda América Latina y capturó la imaginación de grupos juveniles, especialmente universitarios, en los años sesenta.

El Partido Comunista fue reticente frente a la lucha armada, pero quedó atrapado en un dilema: escoger la lucha legal y perder, tras el asalto a Marquetalia, el trabajo campesino adelantado por el partido desde su creación, más de 30 años atrás, y perder, también, tanto los sectores juveniles de la organización, como el atractivo que pudieran conquistar entre la juventud en general. O escoger la vía armada y perder, el trabajo sindical, aplazado por años de clandestinidad, que se veía entonces alentado por el éxito de la C.S.T.C (Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia) y un incipiente trabajo electoral en alianza con sectores de la izquierda liberal.

El ataque gubernamental a las zonas de autodefensas campesinas, Marquetalia la primera, ayudó a resolver la cuestión porque pudo presentar la lucha armada como impuesta por el Estado y la guerrilla como reacción defensiva de los colonos. El Partido Comunista optó por una solución de compromiso y evitó una división: la combinación de todas las formas de lucha. En los comienzos fue funcional para la organización, pero vista con la ponderación de la distancia temporal, fue fatal para el desarrollo posterior del partido: Zeus dio muerte a Saturno, su padre. Más adelante, las FARC se hicieron un aparato militar poderoso y el partido, puesto a un lado por las guerrillas, quedó condenado a la irrelevancia.

Cuando el "socialismo real" hizo crisis en los años 90, la guerrilla de las FARC poco sufrió el impacto. En su constante mutación había entrado en una dimensión diferente, la de encontrar fuentes de financiación importantes que le permitieron desarrollarse como aparato y no depender de las simpatías que pudiera brindarle

algún sector popular (lo que no quiere decir que no las tuviera entre pobladores de sus zonas de influencia). Los cultivos ilícitos en zonas de colonización (Molano, 1987)¹⁸ y luego toda la cadena del narcotráfico se sumaron al secuestro y a la extorsión. Más adelante el desarrollo de la minería ilegal proveyó una fuente de recursos nueva. Siempre fue una guerrilla autofinanciada y autónoma, sin dependencias del exterior. Mientras guerrillas como la salvadoreña tuvieron que sacar conclusiones de la pérdida de su retaguardia en el exterior, las FARC pudieron continuar sin perturbaciones derivadas de los equilibrios mundiales nacientes. Sólo en lo político tuvo alteración el cuadro anterior. Ahora no tenía un “tercero interesado”, así fuera pasivo, en la política internacional. No tener un modelo externo al cual referirse, quita entidad política en alguna medida.

Los modelos externos fortalecen la entidad política, porque alejan, la idea de una lucha armada puramente delincencial. El implícito es: lucho por construir algo como lo existente en tal o cual sociedad y Estado. El modelo recibe la respetabilidad de una entidad política, uno o varios Estados, y apoya el sentido proclamado en lo interno. Ese papel ya no lo cumplía la Unión Soviética disuelta, ni la China o Vietnam, camino de una economía de mercado, ni una Cuba que sin sostén externo no podía ser modelo ni esgrimir poder alguno. Tampoco Venezuela con su extraño experimento populista, entre caudillismo fascistoide y pretensiones de socialismo del siglo XXI, pudo servir de referencia y captar la imaginación popular. En el mundo de la población urbana pudo sentirse la pérdida. Pero en el mundo social de las FARC, campesino en esencia, es posible que no se sintiera.

18 El texto de Molano (*Selva adentro*, 1987) ilustra sobre el comienzo de los cultivos ilícitos y su relación inicial con las guerrillas.

En 1964 se produjo el ataque a Marquetalia y 8 meses después aparece el ELN con su ataque al poblado de Simacota en Santander. En 1982 comienza el primer intento de lograr una paz negociada con las guerrillas. Fue un proceso de paz bien intencionado que logró avances notables, pero que se perdió en medio de un exceso de voluntarismo en su conducción.

En el ínterin de ese periodo, aparecieron el M-19 y el EPL. El uno un movimiento confuso en lo ideológico, con tintes nacionalistas, original en sus métodos (muy dado al golpe espectacular y publicitario) y cuya militancia provenía de antiguos integrantes de la Juventud Comunista y de la Alianza Nacional Popular, el movimiento fundado por el general Gustavo Rojas Pinilla, de corte populista, que en 1970 estuvo ad portas de alcanzar la presidencia de la República, en unas elecciones muy controvertidas y que fueron el pretexto de los fundadores para bautizar el movimiento armado como M-19 (por las elecciones del 19 de abril de 1970). El otro, el EPL, fue la expresión del Partido Comunista M-L (marxista-leninista) una escisión del partido comunista tradicional que se declaró pro-china en la época del cisma ideológico que dividió al mundo del socialismo real. El primero urbano y el segundo bajo la idea del ejército campesino de Mao. Hubo otros movimientos guerrilleros pero su entidad no les dio posibilidades de incidir ni en lo político, ni en lo militar, en el discurrir del conflicto colombiano.

De 1982 en adelante comienza a perfilarse una profundización de los enfrentamientos, cuyas causas son variadas. En el trasfondo de la mayor intensidad del conflicto está el auge de los cultivos de coca, el asesinato masivo de dirigentes de la Unión Patriótica (UP) -partido nacido de los acuerdos con las FARC- el crecimiento de grupos paramilitares autodenominados como "autodefensas", el renacimiento del entusiasmo, ya no tan intenso, vivido antes con la revolución cubana, provocado por la llegada de los sandinistas al poder por la vía armada en Nicaragua y las posibilidades que se le acordaban a la guerrilla salvadoreña

en los años 80. A esto se suma la desconfianza que nunca logró ser superada entre los actores de la negociación, a pesar de medidas tan audaces como la amnistía dada a los guerrilleros, no al final de una negociación como sería lo esperado, sino como prenda de confianza en el mismo inicio del proceso.

En esos mismos años, la violencia llega con fuerza a las ciudades. No la violencia de las guerrillas, sino la del narcotráfico. El Cartel de Medellín, especialmente, se lanzó a practicar una modalidad terrorista típicamente “sub-revolucionaria” (Borrero, 2017, p. 55), en el sentido de tener un propósito político limitado, a pesar de ser de origen delincuenciales. En efecto, el Cartel, bajo el marbete de “Los Extraditables” hizo terrorismo con el fin de obtener la eliminación de la extradición de nacionales (cuando la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos fue el mayor disuasivo con que contaba el Estado colombiano) y de paralizar instituciones del mismo Estado, como la justicia y la policía.

Fue un fenómeno de gran calado, porque por primera vez los ciudadanos y la dirigencia política sintieron la violencia en carne propia. El terrorismo indiscriminado cumplió su objetivo cuando las masas urbanas llegaron a pensar que lo mejor era conceder la no extradición, para calmar la oleada de atentados con autos-bomba puestos en cualquier lugar de las grandes ciudades. Lo que no lograron las guerrillas en décadas de actuación, lo logró el narcotráfico: poner ante los ojos de los habitantes urbanos, la violencia que no habían reconocido cuando ésta se daba exclusivamente en la “otra Colombia”, la rural, la olvidada, la que tiempos atrás había dejado de ser un escenario político importante.

En 1982 fue asesinado un ex viceministro por haberse opuesto a los narcotraficantes; en 1984 fue asesinado un Ministro de Justicia en ejercicio, Rodrigo Lara Bonilla, por perseguirlos. Entre 1989 y los comienzos de 1990, fueron

asesinados 4 candidatos presidenciales, un Procurador General de la Nación, un comandante de la Policía Nacional de Medellín, un magistrado de altas cortes, jueces y cientos de policías (cuyos asesinatos se pagaban por cabeza). Los atentados con explosivos se extendieron entre 1988 y 1993 con una sevicia extraordinaria.

Al mismo tiempo las guerrillas crecieron a un ritmo elevado en los campos. Las FARC alcanzaron la cota de 10.000 unidades armadas hacia 1994-1995. En 1996, esa agrupación inauguró una etapa nueva de combate, con la modalidad de atacar en grupos grandes a unidades también mayores de las fuerzas militares y de la policía. En agosto de 1996, atacaron a una compañía entera del Ejército Nacional, estacionada en una base de patrullaje situada en el Putumayo y lograron una victoria inédita en el curso de la guerra de guerrillas que libraban desde 1964. A este ataque siguieron otros que signaron el periodo comprendido entre 1996 y 1998. En el plano social, los años noventa fueron los de una crisis humanitaria muy profunda. El paramilitarismo se extendió por todo el territorio nacional, con toda su carga de intereses económicos y juntos, paramilitares y guerrilleros, produjeron una oleada de desplazamientos de población, masacres, despojos y destrucción, pocas veces vista en América Latina.

En el péndulo de las guerras irregulares, las fuerzas armadas lograron voltear la tendencia ofensiva de la guerrilla, e inaugurar, a su vez, una etapa de contención eficaz de esa especie de guerra de movimientos. En octubre de 1998, en Mitú, capital del departamento amazónico del Vaupés, asaltada y capturada por las FARC, el Ejército logró, en una operación audaz, recuperar la posición 3 días después de la toma guerrillera. Lo que pudo ser una toma de largo tiempo por causa de las dificultades de acceso al lugar, se transformó, de posible golpe desastroso para el Estado, en punto de quiebre de la guerra a favor del mismo.

Al mismo tiempo que esto sucedía, el gobierno se preparaba para un experimento, a la vez audaz pero improvisado: el comienzo

de las negociaciones de paz con una guerrilla crecida, a la cual se le hacía la concesión de despejar de presencia militar y policial 42.000 km² de territorio (el tamaño de un país como Suiza) como garantía para adelantar allí el proceso de conversaciones. En la práctica se trató de un despeje, no sólo militar y policial, sino del Estado en su casi totalidad y el traspaso de las funciones de seguridad a la guerrilla. Las Fuerzas Militares respetaron los acuerdos a pesar de su desconfianza y durante más de tres años se prolongó esta situación.

En ese periodo se adelantó una negociación caótica. Dos aspectos de la misma sirven para sustentar esta afirmación: uno, la agenda tardó mucho en ser elaborada y cuando se llegó a una, constaba de más de 100 puntos. Cuando una agenda tiene ese tamaño, se puede suponer que las partes no sabían, realmente, qué negociaban. Dos, la negociación se hacía públicamente, expuesta todo el tiempo a los medios de comunicación del país y del mundo. Si a esto se suma que el equipo del gobierno cambiaba constantemente de negociadores, frente a un equipo permanente de las FARC, el cuadro no era promisorio.

Lo único positivo fue la experiencia adquirida. El aprendizaje llevó a entender claramente, más de ocho años después, que una agenda centrada y breve, acompañada de una discreción a rajatabla, negociada fuera de Colombia y con garantes internacionales, era la fórmula ganadora. En la negociación de La Habana, la guerra misma fue el problema por resolver, y se eludió el obstáculo de discutir el modelo de desarrollo y de sociedad para Colombia, siempre insoluble dentro de conversaciones de paz. Al fin y al cabo, el lugar de esa discusión es el ámbito de lo agonal, no el de lo polemial. Primero callar las armas, luego entrar al debate político pacífico sobre los asuntos fundamentales de toda sociedad.

Las negociaciones del Caguán dejaron como saldo una sociedad hastiada del conflicto armado. Otra vez la ley del

péndulo político llevó al otro lado del dilema. Entre la razón o la fuerza, la opinión pidió la opción de la pacificación por medio de las armas. En ese momento las FARC estaban en su punto más alto con cerca de 18.000 unidades en armas. Los largos años de práctica de delitos de alto impacto social dejaban ver su impronta. Pocas sociedades en el mundo habían sufrido el secuestro en la escala alcanzada en Colombia, para sólo mencionar uno de esos delitos. La afectación social llegó a las ciudades y a todas las clases sociales. Los secuestros, ya no selectivos sino aleatorios, en las carreteras, tocaron la sensibilidad de las gentes de forma masiva. Las clases medias en crecimiento aportaron el núcleo de las masas movilizadas contra la idea de una guerra sin fin. En las elecciones optaron por el camino de la mano dura.

Muy frescos están los acontecimientos del siglo XXI. La política de seguridad democrática, la desmovilización de los paramilitares, la ejecución del Plan Colombia, la reducción de la intensidad del conflicto frente a la cota alcanzada en los años 90 y los operativos exitosos de las Fuerzas Armadas contra los cabecillas de las guerrillas. El cuadro general del conflicto armado en esta etapa muestra que el Estado logró retomar la iniciativa antes perdida. En lo militar se debe destacar el crecimiento de las fuerzas de 1998 en adelante y la ampliación de la capacidad operativa. En este último aspecto, el Plan Colombia, en su fase militar, proporcionó capacidades logísticas y organizativas para sostener operaciones de mayor aliento y para hacerlo con tecnologías cada vez más avanzadas.

Las Fuerzas Militares pudieron emprender ofensivas dirigidas a copar la retaguardia estratégica de las guerrillas y a hacerlo con fuerzas mayores de lo acostumbrado. Se pudo controlar mejor el entramado de corredores de movilidad de las guerrillas, especialmente con dos innovaciones: la organización de fuerzas de alta montaña para controlar los pasos andinos y el desarrollo de fuerzas de infantería de marina para controlar las vías fluviales que eran muy importantes para las guerrillas y para los

negocios del narcotráfico. Detrás del esfuerzo hubo tanto apoyo económico y tecnológico externo, como desarrollos nacionales muy importantes. Vale mencionar el papel de la industria naval, con el diseño y construcción de naves de apoyo y de patrullaje de los ríos, el fortalecimiento de las comunicaciones, el avance notable de las capacidades aéreas, las mejoras en la inteligencia, tanto humana como técnica, y la adopción de las doctrinas de operaciones conjuntas. En perspectiva, se dio una transformación de las capacidades militares y policiales del Estado, como no se había visto antes.

El saldo de la larga etapa de guerra de guerrillas es una victimización de población civil que constituye una de las crisis humanitarias mayores de los fines del siglo XX y comienzos del XXI en el mundo occidental, y una sensación de inutilidad del conflicto en términos de estímulo alguno para procesos de cambio en la sociedad y en la política. El conflicto se percibe como una pérdida para toda la sociedad, como un obstáculo para el desarrollo social y económico, para el avance de la democracia, y como un factor de desmoralización y anomia social.

La última reflexión lleva a pensar que la desmoralización y la anomia social¹⁹ han sido mecanismos de reproducción de la violencia durante la historia reciente de Colombia. Desde luego, no son los únicos factores, pero pesan al lado de los que se pudieran llamar factores objetivos o “ambientes favorecedores” como la desigualdad, la exclusión social, la pobreza y la opresión.

5. EL ESTADO, LA FUERZA Y LA VIOLENCIA

En las confrontaciones internas mencionadas, siempre aparecen, en alguna medida, actuaciones por fuera del control de las instituciones encargadas de hacer cumplir las regulaciones para

¹⁹ Concepto sociológico que significa ausencia de normas. En un buen grado la sociedad colombiana es anómica. Las normas se evaden, y la competencia dentro de la sociedad se hace bajo criterios de “sálvese quien pueda”, “de malas”, y “todo vale”.

el uso de la fuerza por parte del Estado. El resquebrajamiento del monopolio de la violencia legítima y organizada, causado por la insurgencia y por la delincuencia organizada, abre la puerta para la aparición de formas degradadas de conflicto armado, y en este ambiente es posible que los organismos de seguridad caigan en la llamada "identificación con el enemigo" que lleva responder con la misma moneda de actuaciones fuera de derecho.

Las llamadas guerras degradadas o guerras de nuevo tipo, han invertido las proporciones de víctimas entre militares y civiles. Tal como lo expresa Mary Kaldor (2001), el drama humanitario en las nuevas guerras es cada vez mayor. En las guerras convencionales de principios del siglo XX, la proporción entre combatientes y civiles muertos era de ocho a uno. En las nuevas guerras la proporción se ha invertido: ocho civiles por cada combatiente, según el cálculo presentado por la misma Mary Kaldor (2001).

Igualmente se puntualiza cómo la irregularidad de los grupos violentos corroe, y revierte, el proceso de desarrollo del Estado moderno. El Estado, en las nuevas guerras, ve cómo se erosiona su economía y su capacidad para movilizar recursos por la competencia del crimen organizado y del paramilitarismo (Melo, 1990). El proceso es inverso al de la formación histórica del Estado y en lugar de la centralización del poder, se da lo contrario y las diferencias establecidas de manera convencional por el derecho, se desvanecen, especialmente la diferencia entre combatiente y no combatiente. Por supuesto, si se comparan los conflictos de las últimas décadas en una escala, se ven posiciones más cercanas a la degradación total que otras; en muchas de las guerras recientes (Estado Islámico en Irak y Siria, el mismo conflicto civil sirio, los africanos: Somalia, Ruanda-Burundi, El Congo, Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil, entre otras) el Estado ha sido uno más de los actores, a veces no el más poderoso o ha desaparecido casi por completo.

En el caso colombiano, la descomposición no ha llegado a tales extremos. Los grados de modernización y de urbanización lo ponen a salvo de un proceso de “somalización.” Tampoco se vive una dictadura al estilo de la siria, capaz de producir una guerra civil de la “última ola” caracterizada por el traslado de la batalla a las áreas urbanas. Más bien, lo destacable es la institucionalidad que ha resistido un conflicto interno contra los ejércitos guerrilleros más grandes de América Latina. En otros países con subversión armada de menor entidad, se llegó a crisis institucionales profundas y golpes de Estado. Sin embargo, el país presenta una crisis humanitaria de magnitud muy elevada, mostrada, especialmente, por el gran número de pobladores del campo desplazados de sus lugares habituales de asentamiento.

El conflicto colombiano no se compara con los africanos y asiáticos mencionados antes y está más cerca del tipo de conflicto interno típico de América Latina, más parecido a los centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, o al del vecino Perú. Pero el colombiano los supera en duración, en número de víctimas y en confusión, si se entiende por confusión la proliferación de actores. Se da el cuadro de violencias del conflicto degradado: Estado, más varias formas de guerrillas revolucionarias, crimen organizado (narcotráfico el más grave) y paramilitarismo.

Como en todos estos conflictos, ha sido frecuente la utilización del terror contra la población campesina, terror que ha resultado rentable para quienes lo practican, bien porque cambia o asegura lealtades o porque produce ganancias de tierras mediante el desplazamiento forzado. El terrorismo, como táctica auxiliar de las guerrillas, también apunta a destruir recursos del enemigo aunque al hacerlo, afecta más a la población en general que a las fuerzas del Estado (p.e. la destrucción de oleoductos, redes de energía eléctrica, puentes) y en ese sentido no ha resultado rentable para el terrorista porque arroja a las poblaciones afectadas en manos de los contrarios y lejos de ganar en el terreno

político, solamente aumenta la degradación del conflicto. El contraterrorismo del paramilitarismo, el más cruel de los vividos en Colombia, más que combatir, se dedicó en las regiones donde hizo presencia, a quitarles a las guerrillas sus bases y apoyos sociales, pero perdieron cualquier legitimidad que hubieran podido conseguir, por causa de la extrema crueldad y sevicia de los métodos utilizados, y por el carácter indiscriminado de sus agresiones. Los grupos paramilitares masacraban, desplazaban y despojaban a las comunidades campesinas e, incluso, a sectores urbanos en pueblos y ciudades pequeñas e intermedias.

En cuanto al papel del Estado colombiano en el desencadenamiento del conflicto y en la actuación irregular de agentes suyos, se debe anotar que en general, los estudiosos del caso coinciden en definir el Estado colombiano como un Estado que no se ha asentado de manera homogénea en el territorio ni ha logrado el total control de su territorio y población. Si bien es un Estado con una tradición histórica larga, con instituciones que funcionan y que se han revelado estables, es débil en el sentido de no haber prevalecido sobre algunas formas de dominación paralelas y de no haber logrado que todas sus instituciones fueran igualmente eficientes, incluyentes y de cobertura nacional. La discusión sobre este tópico está presente en la academia y en la política colombiana, y no hay una conclusión aceptada totalmente. Sobre este particular se puede añadir que ningún Estado es tan homogéneo como se predica en la definición del concepto, y que su relación con los grupos que pueden movilizar recursos de poder es muy variable y compleja.

6. LA VIOLENCIA URBANA

El proceso de urbanización colombiano fue sumamente acelerado durante las décadas de los años 50 a 80. Para no abundar en datos, basta ver los índices de crecimiento de la capital. Bogotá creció a tasas de 7.3 % por año entre 1951 y

1964 y al 6.7 % entre 1964 y 1973. Esas tasas significaban una duplicación de la población cada 10 años. Al lado del crecimiento explosivo de la población en total, se dio una expansión muy grande de las cohortes de población joven, fortalecida, además, en las ciudades, por la migración de población joven del campo.

Las consecuencias para las ciudades fueron muy fuertes en términos de capacidad para absorber niños y jóvenes en el sistema educativo y en el empleo. Súmese a esto que una estructura de edades tan joven, implica unas tasas de dependencia muy altas (el número de personas que dependen económicamente de un trabajador) y éstas a su vez, implican pobreza. La presión por la integración de los jóvenes fue muy alta y el Estado se quedó corto en la provisión de servicios.

En ese ambiente morfológico social, crecieron las barriadas pobres con servicios insuficientes y se debilitó el control social. La familia urbana ya no es la institución única de funciones de socialización y transmisión de valores y normas, las iglesias tampoco, y el Estado que debe asumirlas e institucionalizarlas, no tuvo la capacidad para hacerlo.

Paralelamente, el crecimiento de actividades ilícitas en los ambientes urbanos, el narcotráfico en el primer lugar, penetraron en la conducta y en los valores orientados al lucro. No sólo cambió la cultura: la informalidad se apoderó del trabajo, el consumismo estimuló la competencia desahogada por bienes y prestigio y surgieron en las áreas urbanas caracterizadas como de urbanización sub-normal, formas de control social no estatales y a veces hasta delincuenciales.

El conflicto armado no llegó a las ciudades con intensidad alta, pero la violencia de la delincuencia organizada sí. Los jóvenes fueron la población más vulnerable para la atracción de las modalidades delincuenciales mafiosas como el sicariato, el micro-tráfico de estupefacientes, sin dejar de lado la delincuencia

desorganizada, como el atraco y la rapiña callejera en general. Los grados de consumo de alcohol y de drogas psico-trópicas han ido en aumento para potenciar actividades delictivas y conductas desordenadas.

En las grandes ciudades colombianas, los jóvenes pobres no tienen más grupos de referencia y socialización que "el parche" porque, ni la escuela, ni el núcleo familiar, fracturado en proporción creciente, pueden proporcionarlos. Las mafias han encontrado el terreno abonado para reclutar sus ejércitos sicariales en las pandillas juveniles urbanas. Ya hay en las ciudades síntomas inquietantes de control de zonas por pandillas crecientes, "guerras" por los monopolios ilegales lucrativos y violencia creciente. El ejemplo centroamericano de la expansión del fenómeno de las "maras" es un peligro muy grande.

La aparición de las economías ilegales es uno de los factores que han impedido una mayor mejora de la situación, lo que pudiera esperarse gracias a la transición demográfica que le ha quitado peso proporcional a la juventud en la estructura demográfica, y a los avances de la cobertura en educación y capacitación laboral. Es destacable la disminución de la violencia urbana en las grandes ciudades colombianas. El caso de las tasas de homicidios es dicente: Bogotá que llegó a estar en tasas cercanas a 50 homicidios por 100.000 habitantes al comienzo de los años 90, ronda hoy el 14 por 100.000. Medellín que alcanzó un escalofriante 245 por 100.000 en los primeros años 90, hoy presenta 23 por 100.000, al igual que Barranquilla. Pereira registra 28 y Bucaramanga está en la tasa más baja de las ciudades mayores con sólo 11. Preocupa Cali que no ha podido bajar al mismo ritmo y tiene 51.7 por 100.000. En conjunto el desempeño es alentador pero, comparado con sociedades pacíficas, es todavía alta una tasa de 2 dígitos en homicidios urbanos por cada 100.000 habitantes.

7. CONCLUSIONES

Debe anotarse, para terminar, la advertencia hecha al comienzo del capítulo, en el sentido de aclarar que la violencia urbana ha sido social en esencia. La violencia política sí tocó las ciudades, pero de manera limitada y bajo la forma de terrorismo. Los intentos de guerrilla urbana no prosperaron, como era esperable de una forma de lucha que no se adapta a las condiciones urbanas por múltiples razones derivadas de la morfología y de la estructura social urbana.

Las diferentes expresiones de violencia en la historia de Colombia han tenido un fuerte impacto en todas las esferas de la sociedad colombiana. La violencia liberal-conservadora, así como la violencia de las guerrilleras y los paramilitares, han afectado principalmente la zona rural, mientras que la violencia generada por el bandolerismo, los grupos criminales organizados y las bandas delincuenciales, han permeado principalmente las zonas urbanas del país. Tanto el narcotráfico como el terrorismo, que inicialmente tenían un mayor impacto en los campos y en las selvas colombianas, con el paso del tiempo se han trasladado a las ciudades, impactando a las élites y a la población en general, con atentados con autos-bomba puestos en cualquier lugar de las grandes ciudades. Lo que no lograron las guerrillas en décadas de actuación, lo logró el narcotráfico: poner ante los ojos de los habitantes urbanos, la violencia que no habían reconocido cuando ésta se daba exclusivamente en la “otra Colombia”, la rural, la olvidada, la que tiempos atrás había dejado de ser un escenario político importante.

Es importante destacar que nuestras fuerzas militares se han modernizado logística, tecnológica, estratégica y financieramente, con el fin de hacer frente de manera más efectiva a las diferentes guerrillas y al narcotráfico dentro de la compleja configuración de la geopolítica colombiana, el diseño y construcción de naves de apoyo y de patrullaje de los ríos, el fortalecimiento de las

comunicaciones, el avance notable de las capacidades aéreas, las mejoras en la inteligencia, tanto humana como técnica, y la adopción de las doctrinas de operaciones conjuntas.

No obstante, también se debe resaltar que el Estado colombiano debe incorporar mejores transformaciones y reformas para consolidar un dominio total del territorio y de su población. En este sentido, el Estado debe seguir trabajando en fortalecer sus instituciones para conseguir que estas obtengan una cobertura eficiente, incluyente y eficaz de todo el territorio nacional, para contrarrestar las amenazas del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en todas las esferas poblaciones de Colombia.

Estado que no se ha asentado de manera homogénea en el territorio ni ha logrado el total control de su territorio y población. Si bien es un Estado con una tradición histórica larga, con instituciones que funcionan y que se han revelado estables, es débil en el sentido de no haber prevalecido sobre algunas formas de dominación paralelas y de no haber logrado que todas sus instituciones fueran igualmente eficientes, incluyentes y de cobertura nacional.